

ROMEO GROMPONE Y MARTÍN TANAKA  
EDITORES

**ENTRE EL CRECIMIENTO  
ECONÓMICO  
Y LA INSATISFACCIÓN  
SOCIAL**

**LAS PROTESTAS SOCIALES EN EL PERÚ ACTUAL**

**ADORES AGRUPAMIENTO**

*IEP Instituto de Estudios Peruanos*

*Serie: Ideología y Política, 32*

*Este libro ha sido posible gracias al auspicio de la Fundación Ford*

© IEP INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS  
Horacio Urteaga 694, Lima 11  
Telf. (511) 332-6194  
Fax (511) 332-6173  
E-mail: publicaciones@iep.org.pe  
Web: www.iep.org.pe

ISBN: 978-9972-51-241-4

ISSN: 1019-455X

Impreso en Perú

Primera edición, abril de 2009  
700 ejemplares

Hecho el depósito legal  
en la Biblioteca Nacional del Perú: 2009-04649

Registro del proyecto editorial  
en la Biblioteca Nacional: 11501130900247

*Prohibida la reproducción total o parcial de las características gráficas de este libro  
por cualquier medio sin permiso de los editores.*

**GROMPONE, ROMEO, ED.**

*Entre el crecimiento económico y la insatisfacción social: las protestas sociales en el  
Perú actual/Romeo Grompone, Martín tanaka, eds. Lima, IEP, 2009. (Ideología  
y Política, 32)*

MOVIMIENTOS SOCIALES; POLÍTICA; COCA; PROTESTAS SOCIALES; PERÚ,  
AYACUCHO; CAJAMARCA

**W/04.04.02/I/32**

## Índice

### INTRODUCCIÓN

Los movimientos sociales en el Perú y sus marcos explicativos <i>Romeo Grompone</i> .....	9
I. Las protestas en el Perú entre 1995 y el 2006 <i>Carolina Garay y Martín Tanaka</i> .....	59
II. Alcaldes sin poder. El permanente conflicto por la Municipalidad de Asillo <i>Elisa Wiener Bravo</i> .....	125
III. Treinta y cinco años después. Conflicto y magisterio en Ayacucho <i>Julio Vargas</i> .....	199
IV. “Aquí están los cocaleros”. Un acercamiento a las protestas cocaleras en el valle del río Apurímac <i>Anahí Durand Guevara</i> .....	263
V. Movilización sin movimientos. El caso de los conflictos entre comunidades y la empresa minera Yanacocha en Cajamarca <i>Carlos Meléndez Guerrero</i> .....	321
CONCLUSIONES	
Las nuevas relaciones entre protestas sociales y política <i>Romeo Grompone y Martín Tanaka</i> .....	381

## INTRODUCCIÓN

### Los movimientos sociales en el Perú y sus marcos explicativos

ROMEO GROMPONE

EN LOS AÑOS DE RETORNO a la democracia en el Perú, irrumpieron movimientos sociales con posturas radicales, o por lo menos, poco proclives a la negociación. Como se analizará en este libro, sus soluciones fueron por lo general provisorias y en ocasiones podían dejar un margen para nuevas manifestaciones de protesta. En efecto, no parecen existir garantías institucionales ni condiciones políticas que otorguen la seguridad de que se ha logrado un aprendizaje político de esas experiencias, de modo de garantizar la estrategia más adecuada para enfrentar más adelante situaciones de parecido tenor. Como veremos brevemente en esta introducción, estos acontecimientos surgen, entre otras razones, como consecuencia de una desordenada intervención del Estado en zonas alejadas y conflictivas, más que de su definitiva ausencia, explicación a la que se recurre generalmente. En otras palabras, las instituciones a quienes compete la resolución de estos conflictos no son eficientes.

A esta situación se agrega que el país ha atravesado un proceso de transición democrática con una débil intervención de los partidos políticos, lo que como veremos es un problema que no ha cambiado en lo fundamental en los últimos años. Ello, entre otras consecuencias, afecta las mediaciones políticas que podrían establecer un marco previsible de negociación. Esta condición se agrava, como se verá, por la debilidad

de las élites nacionales y regionales, lo que repercute en dificultades para que aparezcan liderazgos políticos y sociales, y en una falta de capacidad de convocatoria de actores que podrían lograr estabilizarse en una determinada condición.

Los movimientos analizados se ubican en el plano municipal en Puno; involucran a cocaleros en el valle de los ríos Apurímac y Ene; a fracciones disidentes del gremio magisterial en Ayacucho; y a grupos enfrentados a la actividad minera en Cajamarca. Sin establecer apresuradas asociaciones, ocurren antes de que surgiera como una alternativa política con perspectivas de triunfo electoral un candidato caracterizado por el radicalismo de su prédica, como Ollanta Humala. Este libro considerará estas manifestaciones en detalle en la medida que otorgan instrumentos de análisis para entender el aparente desfase entre crecimiento económico e insatisfacción social, una cuestión poco analizada y poco entendida en nuestras ciencias sociales. Analizamos estos casos utilizando la teoría de los movimientos sociales, relativamente poco aprovechada en nuestro medio, introduciendo matices y haciendo los ajustes necesarios para poder dar cuenta de la sociedad peruana.

Partimos de una aproximación cuantitativa realizada por Carolina Garay y Martín Tanaka, ubicando los escenarios de protesta entre los años 1995 y 2006. Se ha caracterizado en rasgos generales año por año la incidencia de las demandas políticas, laborales, administrativas, presupuestales y sociales, los actores sociales involucrados, su organización y sus diversas expresiones de protesta —marchas, paros, plantones, bloqueos, toma de locales, huelgas de hambre e invasiones, entre otras. Se atendió también a las respuestas del gobierno en estas coyunturas, que daban indicios sobre su estrategia, su capacidad política y su disposición tanto para negociar como para el enfrentamiento.

### **La compleja trama de los conflictos locales: el caso de la Municipalidad de Asillo**

Uno de los casos elegidos fue el que llevara al encarcelamiento del alcalde de Asillo en la provincia de Azángaro, Puno, y a la revocatoria del conjunto de regidores elegidos en el 2002, trabajo que desarrolla Elisa Wiener. Como en la mayoría de los casos estudiados, en este interviene un conjunto de actores estatales y sociales poco dispuestos a encontrar

un punto de confluencia y que recurren con frecuencia a estrategias erráticas o cambiantes. En Asillo tratan de hacer valer sus posiciones e intereses el alcalde distrital, los regidores que lo apoyan o sus enconados opositores, el alcalde provincial, las autoridades de algunos centros poblados, varias organizaciones sociales, un partido político, la Contraloría General de la República, y en las etapas finales del conflicto, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones.

Lo ocurrido allí es uno de los tantos conflictos locales que tuvieron lugar en el país en el momento mismo en que se llevaba adelante la reforma descentralista, una de cuyas expectativas, además de lograr una mayor democratización, era garantizar condiciones de gobernabilidad al aumentar el número de interlocutores políticos a los que la población, en teoría, tomaría como referencia para presentarles sus demandas y problemas. Quizás, como se verá en ese estudio, esta proliferación de autoridades con competencias legales para intervenir, o en otros casos asumidas por su propia cuenta, provoca confusiones y precipita los enfrentamientos en un juego de intereses extremadamente particularizados.

Un alcalde que es electo con un escaso porcentaje de votación obtiene la mayoría de regidores en el concejo municipal gracias al llamado "premio de mayoría" que orienta las reglas del sistema electoral municipal. Afronta desde los inicios de su gestión la oposición no sólo de candidatos de otras listas, sino de los ciudadanos de la zona cuyos votos no se ha preocupado de conseguir, por cálculo político o por recursos económicos limitados. En la dispersión electoral, basta contar con el apoyo de un grupo de electores que lo lleva a obtener su cargo sobre la base de redes de relaciones previas que financian la candidatura a cambio de obras y servicios que benefician al reducido grupo ganador. Esta circunstancia, por lo general, va en detrimento de las prioridades que podrían contribuir a una labor más integrada en la circunscripción que se gobierna.

Ya en los primeros meses en que el alcalde de Asillo asume el cargo, se encuentra ante críticas a su labor, en este caso centradas en el incumplimiento de ofertas relacionadas con la ejecución de obras de electrificación urbana y la dotación de maquinaria para las zonas rurales. No es sencillo saber en este caso, como en otros que ocurren en gobiernos locales, cuánto de estas críticas responden a omisiones de

entre partido y movimiento, los planos se confundan o no logren confluir en otros, y ocurra algo que no se parece en nada a la laboriosa construcción institucional que se tiende a atribuir a las organizaciones políticas tradicionales. No se trata entonces —como se dice habitualmente— de que los movimientos sociales no se canalicen por cauces institucionales. Queda pendiente responder a la pregunta previa: de qué cauces estamos hablando.

Y en este proceso, no parecen existir élites con capacidad de convocatoria o de formar opinión en lo político o en lo social, aun cuando algunas mantengan su influencia en el plano económico. Esta situación hace que los análisis políticos y sociales sean con frecuencia juicios improvisados. En Lima no se sabe lo que ocurre en las regiones, en el norte del país, lo que sucede en el sur, y así, nadie puede asumir una representación que no tiene. Y hasta el propio espacio mediático, al que se le suele atribuir una importancia decisiva, no logra formar una sustantiva corriente de opinión.

### **Un nuevo estilo de movimientos sociales**

Como veremos más adelante, existe un marcado contraste entre la numerosa literatura que existe sobre los movimientos sociales en América Latina y lo relativamente poco que se ha profundizado en las diferentes versiones teóricas del concepto. Quizá estas deficiencias no sean sólo propias de la región. Llama la atención cómo numerosos autores de diversa procedencia enfocan el tema desde una perspectiva en cierto modo encerrada en sus propios conceptos, sin que haya un diálogo con otras corrientes de interpretación de la materia, poco dispuestos a analizar las conexiones con el sistema político y en algunos casos también con la historia, sobre la que hacen a menudo gruesos trazos, abarcando prolongados periodos.

De lo expuesto, surgen características comunes en los movimientos sociales examinados y que nos parece han sido señaladas con corrección en estudios que todavía son relativamente marginales respecto de la corriente principal de interpretación (Zibechi 2003).<sup>3</sup> En

---

3. Coincidimos con este autor acerca de las características de estos nuevos movimientos sociales, pero no cuando afirma que ellos expresan nuevos lazos sociales

signos delimitan la tierra, hacen una nueva geografía, reinventando la sociedad. La geografía, de este modo, de sustantivo se transforma en verbo, acto de marcar la tierra” (Porto Gonçalves 2004).

Cambia también en su naturaleza el discurso sobre la inclusión social. En parte, porque no se trata de problemas que las élites —conscientes del problema— resuelvan, como ha ocurrido en otras situaciones. En parte también, porque los que antes se sentían marginados se encuentran ante lo que consideran una oportunidad para hacer valer sus derechos. En buena parte de los casos aquí examinados, son ellos los que se constituyen en actores influyentes y hasta decisivos. Los valores que defienden y sus aspiraciones y demandas se expresan sin que influyan actores externos tan significativamente como en episodios anteriores.

Planteadas así las cosas, hemos visto que en los casos que se analizarán en este libro, a la vez que los protagonistas reclaman la intervención del Estado, toman distancia de él. En pocas ocasiones estos acontecimientos terminan en casos de cooptación o clientelismo, como ocurriera en otras etapas de América Latina. Es cierto que entran en juego un conjunto de actores —algunos de ellos internacionales— que tratan de hacer valer su opinión, pero existe, como se ha visto, una manifiesta preocupación de parte de los principales involucrados por mantener su autonomía.

Los partidos nacionales no tienen influencia o cumplen un papel tangencial. Quizás resulta exagerado señalar, como han hecho algunos autores, que estos movimientos tienden a la autorrepresentación. Lo que es cierto es que su relación con las organizaciones políticas tradicionales es de desconfianza y que las dirigencias de estas organizaciones encuentran dificultades para cumplir tareas de mediación cuando una comunidad protesta. En algunas circunstancias, esto lleva a constituir nuevos alineamientos políticos, como ha ocurrido en Bolivia o Ecuador, o a que de modo indirecto se establezcan relaciones con nuevos partidos, tal como ha sucedido en el Perú recientemente.

Estos movimientos sociales se caracterizan también por un mayor protagonismo de las mujeres en cargos de dirigentes. Ellas manejan con soltura un discurso que pasa de las negociaciones cuidadosas a las confrontaciones abiertas. Han hecho suyos los códigos de la violencia social y del autoritarismo político. Estas nuevas posiciones alcanzadas especialmente por aquellas que asumen representaciones indígenas y



las líderes cocaleras no parecen poder explicarse sino de manera muy parcial por los cambios culturales que ha procurado introducir el feminismo. Las trayectorias de estas nuevas lideresas están en cambio marcadas por la migración, por haber vivido en centros urbanos una parte de su vida y haber alcanzado mayores niveles de escolarización. Influye también que, a diferencia de las reivindicaciones tradicionales de los gremios sindicales, existe una más estrecha relación entre economía familiar e ingresos. Lo hemos visto en el caso de las comunidades afectadas por la minería y en el movimiento de los cocaleros.

Las demandas, además, no se centran en los sueldos, sino en necesidades básicas de un territorio, como agua y otros servicios, y en las rentas derivadas de los hidrocarburos, entre otros recursos. Si bien se apoyan en parte en lo redistributivo, estas demandas aluden a legados étnicos y culturales que fundamentan los derechos que la población reclama.

El afianzamiento territorial al que hemos hecho referencia, otorga, es cierto, capacidades de innovación y resistencia en una zona, pero dificulta establecer redes más amplias. Se ha podido apreciar este hecho en las protestas locales poco articuladas entre sí, en las dificultades de unificación del movimiento de los cocaleros, en la debilidad de organización de la CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería), que pretende juntar al conjunto de los afectados por esa actividad, y en las fracciones de gremios nacionales, como el de los maestros. El control de una determinada zona promueve liderazgos probablemente cuidadosos en preservar sus competencias en los sitios donde actúan, y distantes —de manera deliberada o no— de otros liderazgos que acaso persiguen los mismos objetivos en otros lugares.

Probablemente ello incida en trabar la renovación del sistema político. Mientras entran en decadencia los partidos nacionales históricos, existen dificultades para constituir nuevas organizaciones políticas con perspectivas de durar en el tiempo.

### **Los gremios**

Los sindicatos forman parte de lo que se había dado en llamar “movimientos sociales tradicionales”. No nos extenderemos en el tema porque escapa a los propósitos de esta introducción. Sólo diremos que muchas de sus rutinas centradas en la defensa de un trabajo estable

han perdido vigencia, como consecuencia de los cambios económicos y de una legislación que les quita espacio para sus protestas y sus negociaciones. Como contrapartida, están surgiendo nuevas formas de asociarse dispersas en el espacio, pero en las que la procedencia de clase trata de articularse con la demanda étnica en un discurso que no queda solamente en la denuncia de una creciente exclusión social que ha afectado a obreros, campesinos, empleados. Al asociarse los dos elementos señalados de discriminación —la procedencia de clase y lo étnico—, pueden hacerse más radicales los planteamientos contestatarios y, como también veremos, el repertorio de las protestas. Ya no se trata únicamente de la huelga seguida de negociaciones sino de bloqueos de caminos y de movilizaciones en las ciudades. En la mayoría de los países de América Latina la política ha retornado a las calles como uno de los escenarios privilegiados.

### **La vigencia de los llamados nuevos movimientos sociales**

Este escenario, por cierto de confrontación, supone nuevos estilos de hacer política. Bajo ese mismo concepto se hablaba de los movimientos que surgieron desde 1970 y que defendían un territorio físico —como el cuerpo y la identidad sexual—, un espacio —como el entorno físico, la vecindad y la ciudad—, los derechos humanos y el medio ambiente. Estos temas estaban en parte olvidados por los partidos, los gremios y el Estado en Europa occidental, en la medida en que la agenda política tenía que ver fundamentalmente con pactos asociados a la productividad y la redistribución del excedente. Se habían dejado de lado aquellos aspectos que tenían que ver con la vida cotidiana o que cuestionaban las rígidas separaciones entre lo público y lo privado.

Los movimientos en mención tendían a establecer débiles jerarquías entre sus miembros, tomando distancia de los tradicionales criterios de autoridad. Sus compromisos eran universales. Buscaban traspasar fronteras y su apoyo fundamental lo constituían las nuevas clases medias y los jóvenes profesionales.

En América Latina se recurrió en parte a la lógica de estos movimientos, en la medida que las dictaduras militares cerraban otros espacios para el ejercicio de la práctica política. Estas reivindicaciones que en buena parte ocupaban el espacio de la cultura podían ser más

toleradas por los regímenes autoritarios y procuraban influir en la búsqueda de cambios democráticos.

Estamos, como se ha expuesto, en una etapa diferente. La recuperación política de lo étnico se plantea de modo más acentuado en términos de poder. La defensa del medio ambiente moviliza directamente a las comunidades afectadas, de una manera más radical que los ciudadanos bien intencionados que se preocupan por el tema. Los intereses ahora resultan mucho más marcados, a cambio de ser más centrados en un espacio y menos universales en sus pretensiones. Ha cambiado además la base social que les prestaba su apoyo. Ahora son grupos populares postergados y no personas en situaciones relativamente privilegiadas. Y el feminismo ha pasado a ser una tarea cada vez más especializada a cargo de determinadas élites que circulan en ámbitos internacionales, mientras que un nuevo grupo de lideresas realiza planteamientos radicales en los que la reivindicación de género ya no es lo más importante.

### **Los marcos teóricos para analizar los movimientos sociales**

Corresponde ahora analizar los casos estudiados de acuerdo a las teorías que existen sobre su lógica de actuación y las razones por las que suceden. En general, salvo los puntos de partida que a nuestro criterio son aproximaciones preliminares y superficiales (que indicaremos), las distintas interpretaciones de estos procesos, si bien no coinciden, son valiosas.

Los movimientos sociales que han irrumpido en el Perú en los últimos años parecen, en la mayoría de los casos, haber tomado por sorpresa al gobierno, a la clase política y a buena parte de quienes interpretan lo que está ocurriendo en la sociedad. Surgen entonces lecturas no siempre bien fundamentadas. En muchas de ellas, quizás las menos informadas pero a la vez las más influyentes, estas nuevas expresiones se explican como una suerte de atavismo o reflejo condicionado. Siguiendo, acaso sin darse cuenta, viejas lecturas sobre las expresiones de protesta, señalan la irracionalidad de estas expresiones o por lo menos su falta de cálculo o sus propósitos espurios. Este tipo de consideraciones sustituye el esfuerzo de comprender por la calificación moral, y el poder de movilización de un grupo se atribuye a unos hasta

movimientos sociales, éstos se remitan directamente al Ejecutivo. Este último aparece como el interlocutor privilegiado y exclusivo, aquél que posee (y a veces con carácter casi exclusivo) capacidad de negociación.

En la hipótesis de una distribución equilibrada de poderes, se supone que hay diferentes puntos de acceso al sistema político, lo que permite la interposición ordenada de las demandas, así como —a nuestro criterio— la vigencia de organizaciones relativamente mejor articuladas que puedan establecer una agenda que no precipite una protesta disruptiva.

Como se sabe, una de las razones por las que diversos gobiernos de la región han decidido desarrollar políticas descentralistas es garantizar la gobernabilidad, ya que se espera que cada conflicto se discuta en su propio ámbito, para el caso peruano, el distrital, el provincial, el regional y el del gobierno nacional. Otra vez se confía en que la multiplicidad de puntos de acceso al sistema político, al aumentar el número de interlocutores representativos, contribuya a establecer un principio de orden. No obstante, problemas diversos —desde la afirmación política de las autoridades locales hasta competencias acotadas, pese a una presunta voluntad legislativa de trasladarlas a ese espacio de gobierno—, provocan, como se verá en los casos estudiados en este libro, que conflictos que se circunscriben a un territorio determinado, cobren proyección nacional. Esta situación en parte es atribuible a las contradicciones que hay en la política de los sectores del Estado, o en la de estos sectores con las autoridades regionales, como parece ocurrir en los conflictos suscitados en la actividad minera.

Como se sabe, los rasgos que presentan los partidos dependen tanto de las características de la sociedad donde actúan, como del régimen electoral vigente (que determina la composición del Congreso) y de la legislación que lo regula en aspectos como sus modalidades de financiamiento, su permanencia en el tiempo según las adhesiones obtenidas y los métodos para elegir a sus autoridades, si bien en este último caso, en el Perú, las disposiciones que regulan el tema parecen acatarse de manera formal más que seguirse. Se sabe que no contamos con un sistema de partidos, que éstos no cubren la mayoría del espacio de la representación, que no hay una interacción regular entre ellos, que no cuentan con una estructura consolidada, y que salvo (y parcialmente) por el APRA, no alcanzan una cobertura nacional y gozan de escasa credibilidad.

primeros meses del gobierno de García. Durante el gobierno de Toledo ocurrieron 1,077 protestas más que durante el gobierno de Fujimori.

En el gráfico 1 se observa que durante el gobierno de Fujimori las protestas sociales en el país no eran tan frecuentes, aunque a partir de 1997 aumentan a más del doble. La dinámica de las protestas empieza a cambiar en el 2000; en ese año, la cantidad de protestas aumenta considerablemente. Se trata de un año de grandes protestas de carácter político que expresaban un fuerte rechazo al autoritarismo y a la segunda reelección de Fujimori. Así, en 1995 ocurrieron 185 protestas, en 1996 disminuyeron a 153, en 1997 aumentaron a 340, en 1998 se mantuvo el ritmo con 348, para disminuir luego en 1999 a 230; sólo un año después, en el 2001, aumentaron a 720 las protestas. Durante los años de la “transición democrática”, el número de protestas fue más alto: el año 2001 termina con 671. El mayor número de protestas ocurrió en el 2002, llegando a sumar 797; la mayoría eran demandas de tipo laboral. En el 2003 el número de protestas disminuye a 498 (es decir, decae en un 9.21%), en el 2004 se da un aumento contándose 559 protestas, y en el 2005 se amplían a 716, bastante cerca del número de protestas registradas en año 2000. Finalmente, en el año 2006 —un año electoral—, las protestas decaen considerablemente a 226; de ellas, 78 corresponden a los primeros meses del segundo gobierno de Alan García.

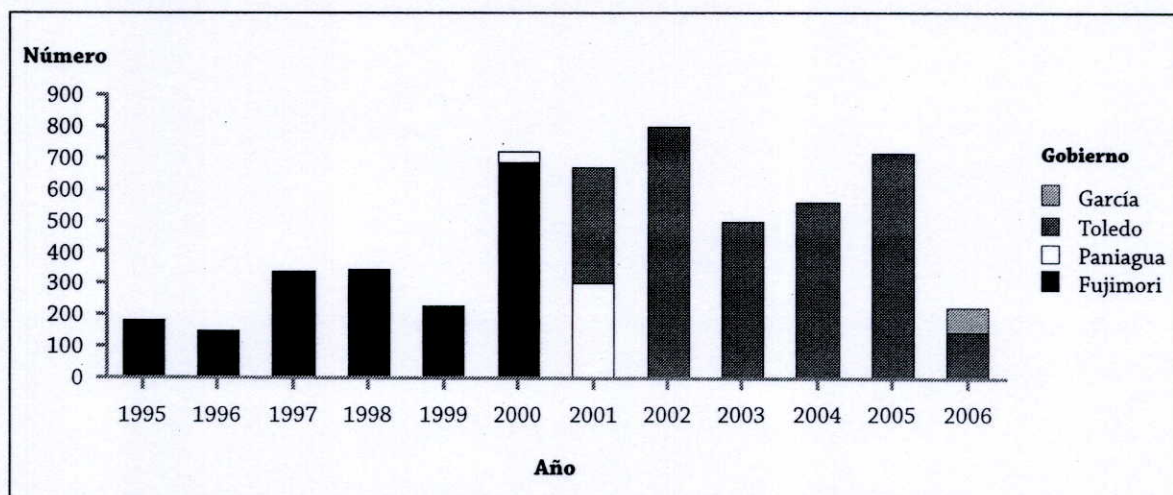
Estas cifras muestran que en el contexto de la “transición democrática”, las protestas aumentaron significativamente, dejando atrás un periodo de relativa calma, a excepción del año 2000, que es un año especialmente complicado por los cuestionamientos a la reelección de Fujimori.

### **Los escenarios de las protestas**

Durante todo el periodo en estudio (1995-2006), la ciudad de Lima fue el escenario principal de las distintas acciones de protestas, concentrando el 48.08% de ellas. Esto se explica, por un lado, porque las fuentes consultadas prestan mayor atención a los sucesos que ocurren en la capital del país, y por otro, porque hay una doble dinámica que muestra que las capacidades para gestionar la resolución de los conflictos no se dan en los niveles locales y regionales del país, sino en el nivel central, y ello alienta a los actores a presentar sus demandas a las instancias

**Gráfico 1**

PERÚ 1995-2006. NÚMERO DE PROTESTAS SEGÚN GOBIERNO Y POR AÑO

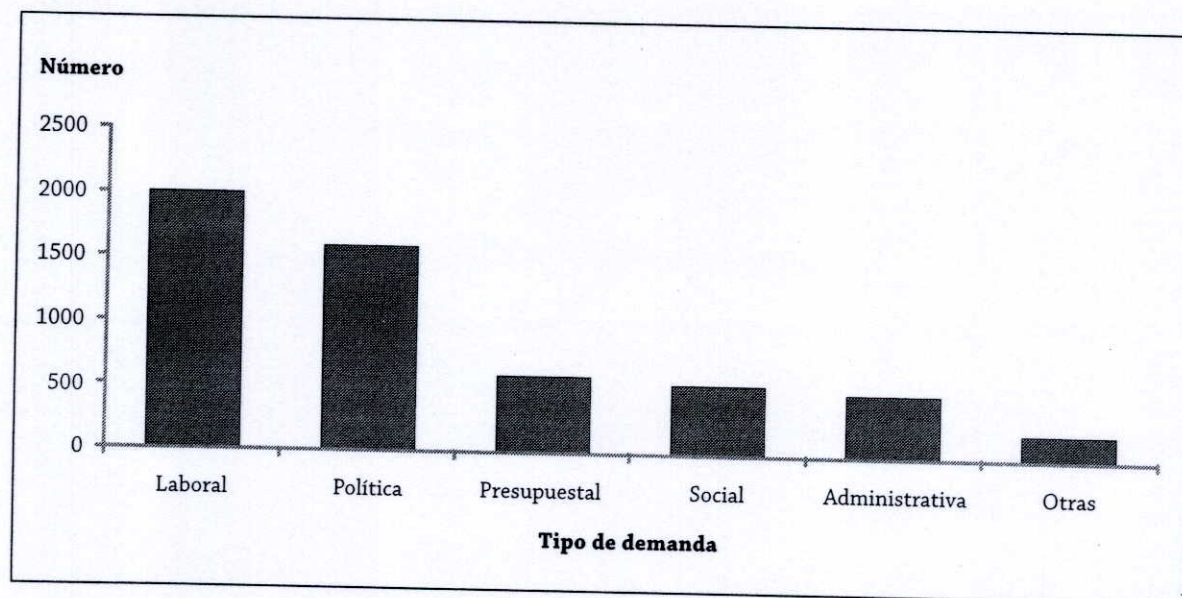


centrales que se ubican, precisamente, en la ciudad de Lima. Más allá <sup>regiones</sup> de Lima, las cinco regiones donde hubo más protestas son Arequipa, Cusco, Ancash, Puno y Piura. En cambio, las regiones que tienen menores registros de protestas son Huancavelica, Moquegua, Amazonas y Madre de Dios.

Si analizamos la evolución de las protestas comparando el periodo 1995-2000 con el 2001-2006, observamos que la región que experimentó el mayor aumento en el número de protestas fue Ucayali, que pasó de 8 protestas a 53 durante la etapa de la transición democrática, es decir registró un incremento de 563%. Luego, aparece la región de Puno, en donde aumentaron las protestas, especialmente las de carácter político. En esa región, durante la primera etapa, se registran 38 protestas, y en la segunda etapa, 166; es decir, hubo un aumento de 337%. A continuación figura Ayacucho, que pasó de 16 a 68 protestas durante la segunda etapa, es decir, aumentó en un 325%.

**Gráfico 4**

PERÚ 1995-2006. NÚMERO DE PROTESTAS POR TIPO DE DEMANDA

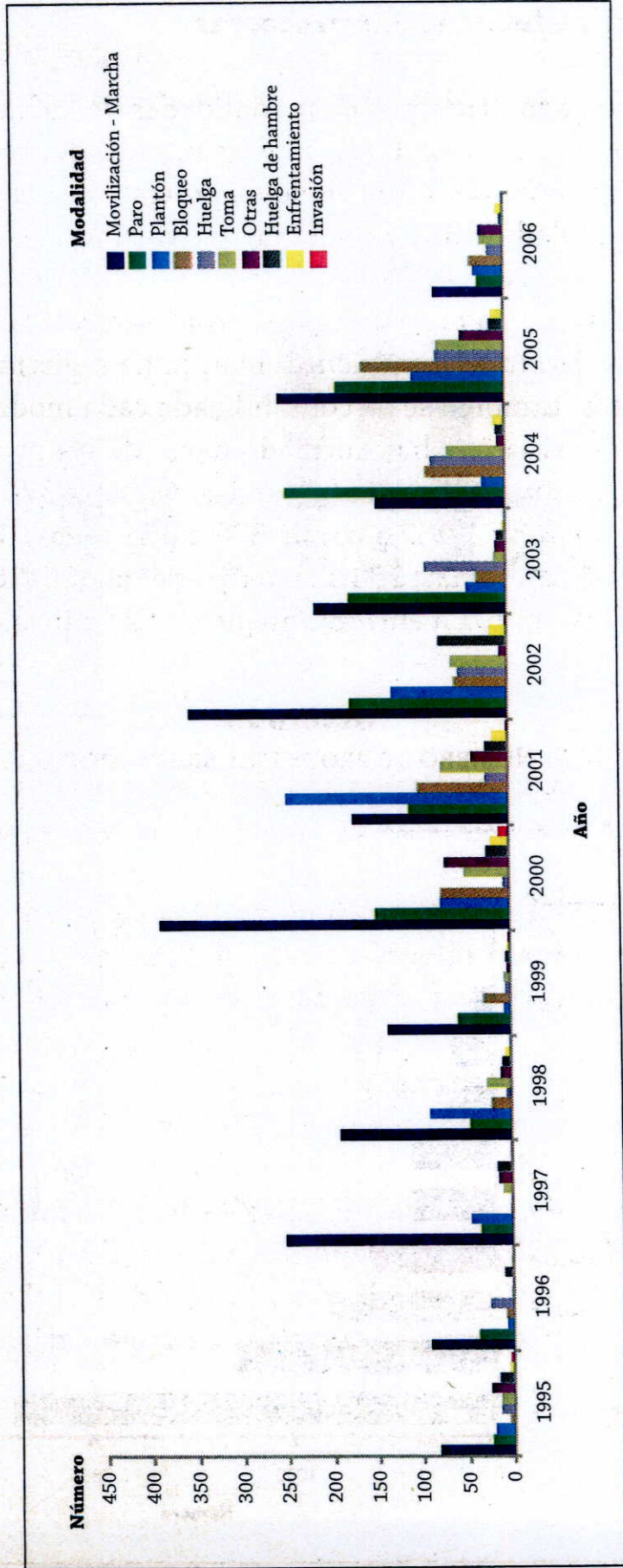
**El carácter de las protestas**

Las protestas constituyen una manera —cada vez más recurrente— de enunciar el descontento colectivo. Su carácter o sentido se define por el contenido de las demandas que expresan los manifestantes y que hemos clasificado en seis tipos: demandas políticas; laborales; administrativas; presupuestales; sociales; y una categoría *otras*. Las protestas de carácter o con sentido *laboral* han sido las que han predominado con 2,005 registros, seguidas de las *políticas* con 1,597 casos. Luego figuran las demandas *presupuestales* con 600 registros, las de carácter *social* con 543 registros, las demandas *administrativas* con 496 registros y, por último, las *otras* con 202 registros.

Durante el gobierno de Fujimori predominan las demandas políticas que suman un total de 811 protestas, aunque en 1995 y 1996 prevalecen las de carácter laboral, con 78 y 115 casos respectivamente. A partir de 1997 predominan las demandas de carácter político, disparándose estas en el año 2000 con 408 casos. Durante los años de la “transición democrática”, las demandas que predominaron fueron las laborales, que suman 1,421 registros. Del gráfico 5 se deduce que el sentido de las protestas ha girado de lo político, fuertemente expuesto entre 1998 y el 2000, hacia lo laboral entre el 2001 y el 2006.

### Gráfico 25a

PERÚ 1995-2006. NÚMERO DE PROTESTAS SEGÚN MODALIDAD DE LUCHA POR AÑO



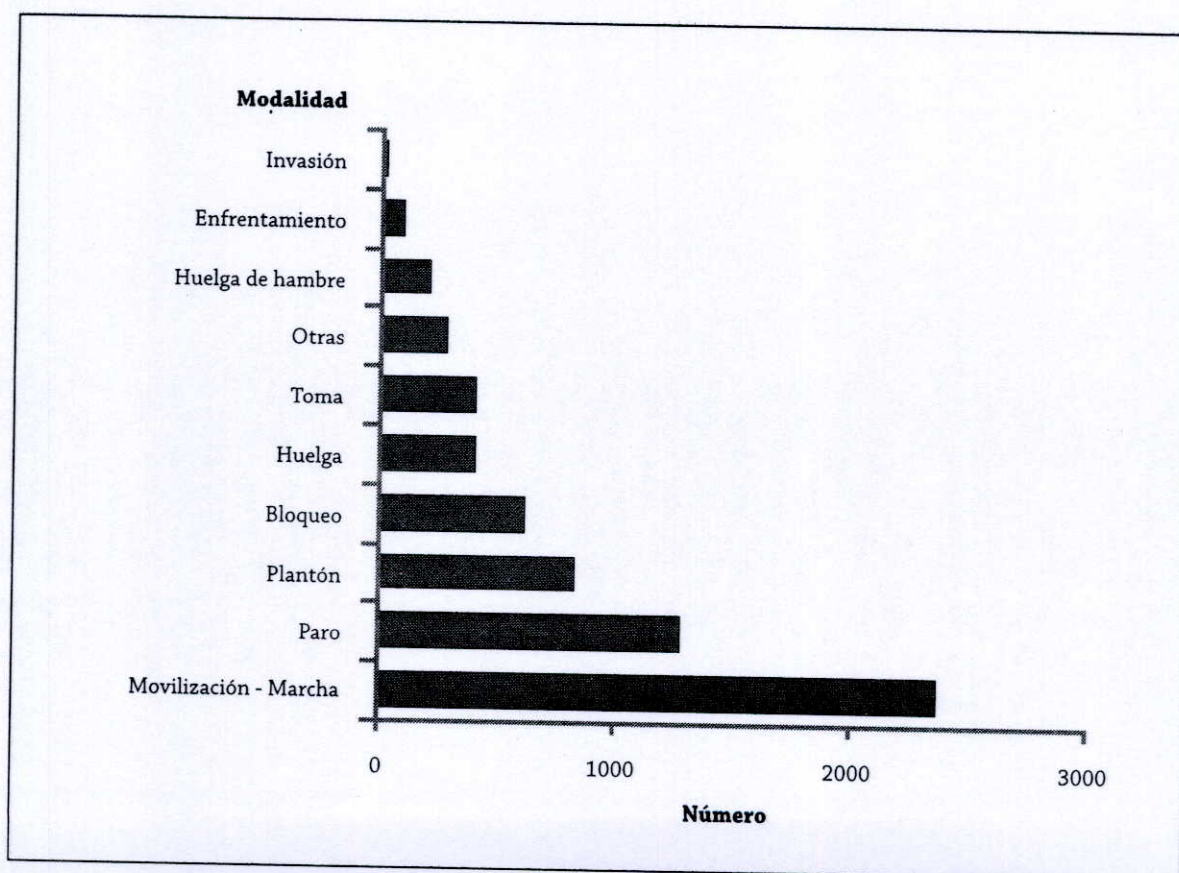


## Modalidades de lucha en las protestas

Hemos identificado diez tipos de modalidades de lucha utilizadas por los manifestantes para expresar su descontento durante las acciones de protesta. Durante todo el periodo de protestas, la *movilización-marcha* es la modalidad de lucha o medida de presión más recurrente. Le sigue el *paro* (ya sea de 24, 48 o 72 horas), el *plantón*, el *bloqueo*, la *huelga general indefinida*, la *toma de locales*, *otras medidas*, la *huelga de hambre*, el *enfrentamiento* y la *invasión*. Si bien se ha registrado un total de 5,443 protestas, también se ha contabilizado cada modalidad de lucha o medida de presión que han formado parte de las protestas, llegando a registrarse un total de 6,568, de las cuales 2,371 corresponden a *movilización-marcha*; 1,282 a paros; 838 a plantones; 619 a bloqueos; 416 a huelgas; 412 a tomas; 284 a otro tipo de modalidad de lucha; 217 a huelga de hambre; 101 a enfrentamientos; y 28 a invasiones.

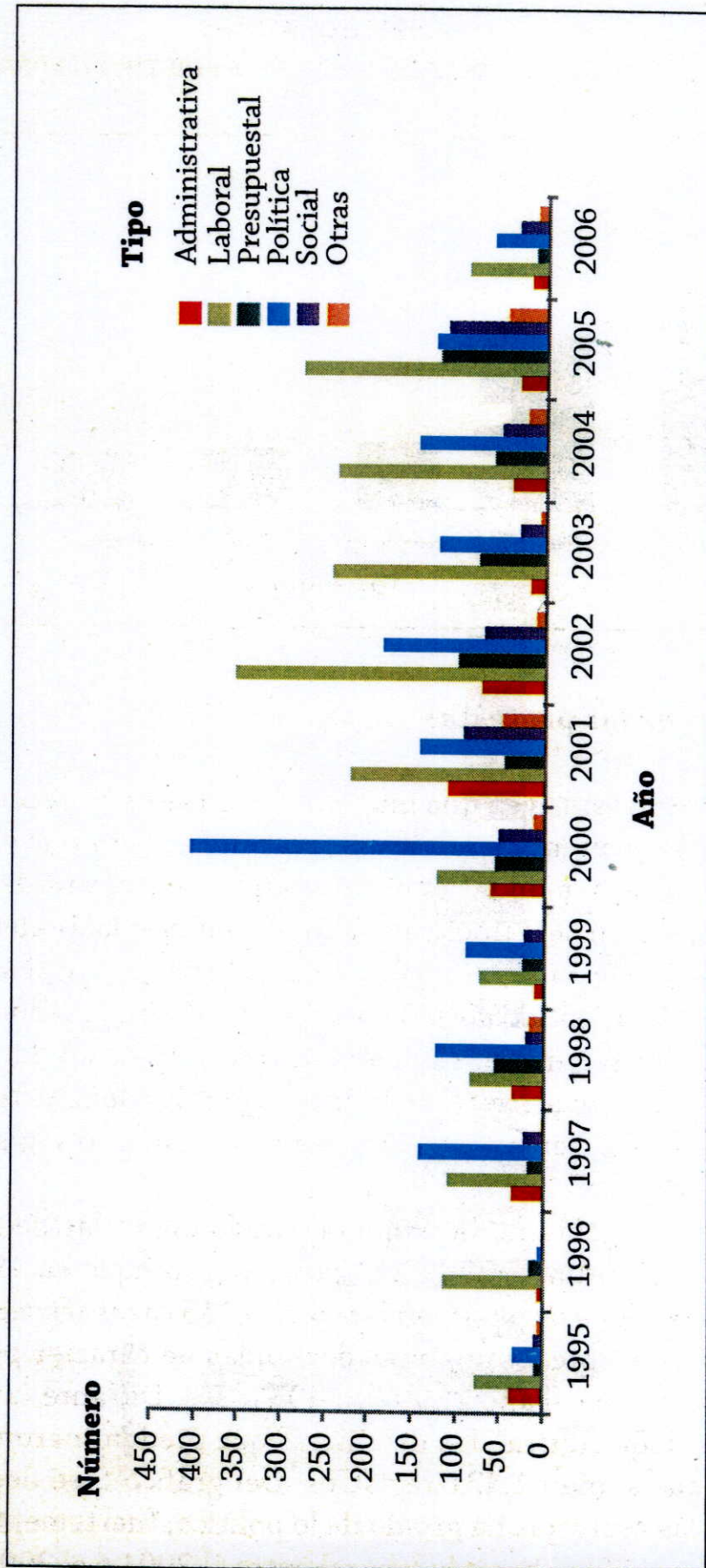
**Gráfico 25**

PERÚ 1995-2006. NÚMERO DE PROTESTAS SEGÚN MODALIDAD DE LUCHA



**Gráfico 5**

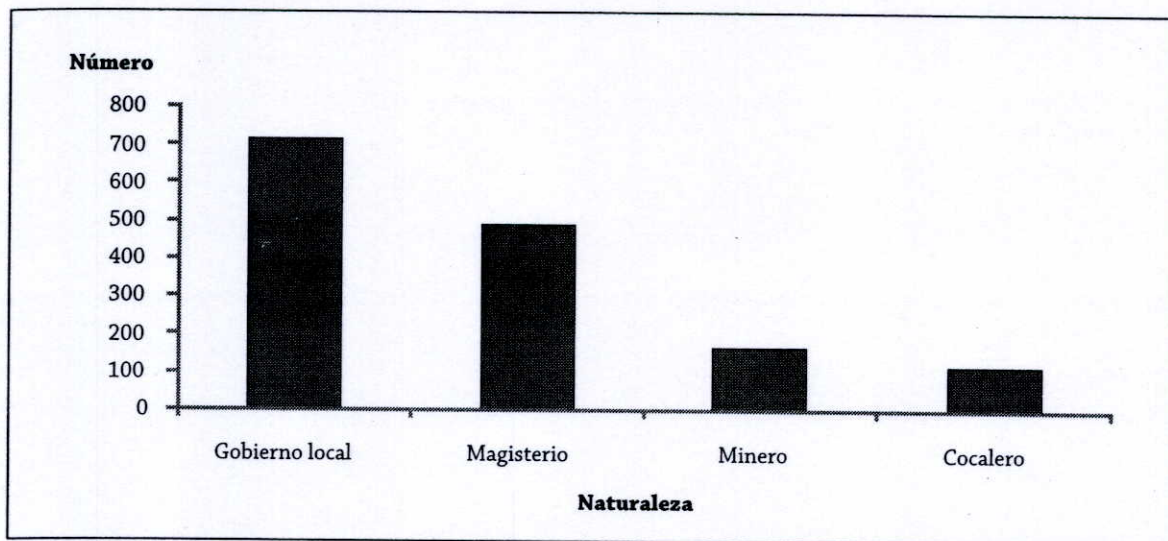
PERÚ 1995-2006. NÚMERO DE PROTESTAS POR TIPO DE DEMANDA Y POR AÑO



**Gráfico 50**

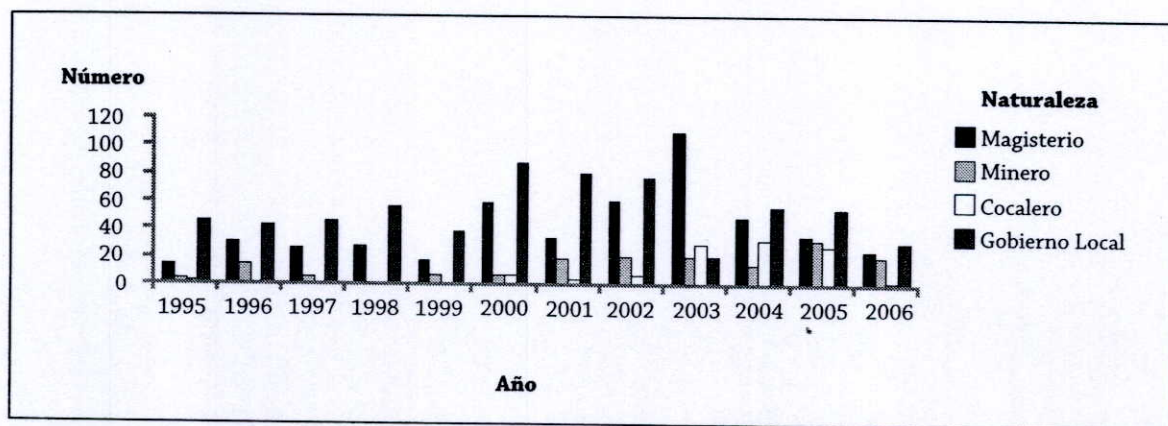
PERÚ 1995-2006. NÚMERO DE PROTESTAS SEGÚN SU NATURALEZA

*es*



**Gráfico 50a**

PERÚ 1995-2006. NÚMERO DE PROTESTAS SEGÚN SU NATURALEZA POR AÑO

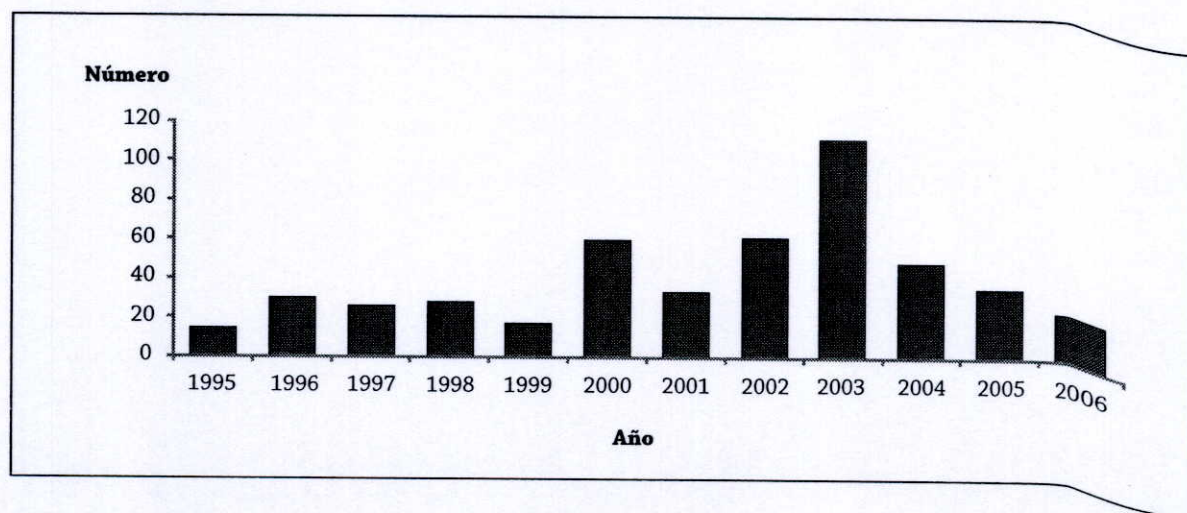


### **Protestas en el magisterio**

Las protestas en el magisterio han sido protagonizadas por profesores que pertenecen al sector público, ya sean que estén afiliados al SUTEP o no. Los profesores del sector privado (incluidos los que enseñan en campamentos mineros) no han sido considerados en este grupo de protestas. En total, hubo 175 protestas en el magisterio entre 1995 y el 2000. En esta etapa, entonces, las protestas han sido relativamente escasas, salvo en el año 2000, cuando casi llegan a triplicarse respecto a 1999. En los años siguientes, entre el 2001 y el 2006, el número de protestas en este sector suma 312. La tendencia del número de protestas en esos años fue en aumento, aunque llegado el 2004 decayó a la mitad del año anterior.

**Gráfico 51**

PERÚ 1995-2006. NÚMERO DE PROTESTAS EN EL MAGISTERIO POR AÑO



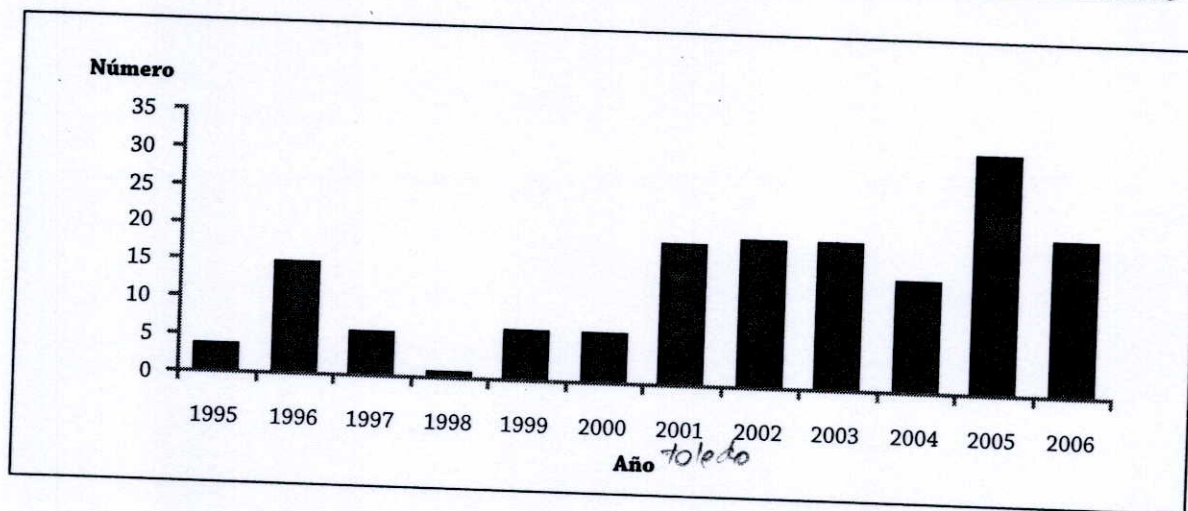
### **Protestas en el sector minero**

Las protestas en el sector minero suman un total de 167 casos. Han sido protagonizadas, por un lado, por trabajadores de las empresas mineras (formales e informales) y, por otro, por comunidades campesinas, autoridades, agricultores y diversas federaciones y frentes. Durante el gobierno de Fujimori, las protestas en este sector fueron relativamente

escasas; sólo después, durante el gobierno de Alejandro Toledo, saltaron a la escena y su tendencia fue a aumentar.

**Gráfico 52**

PERÚ 1995-2006. NÚMERO DE PROTESTAS EN EL SECTOR MINERO POR AÑO

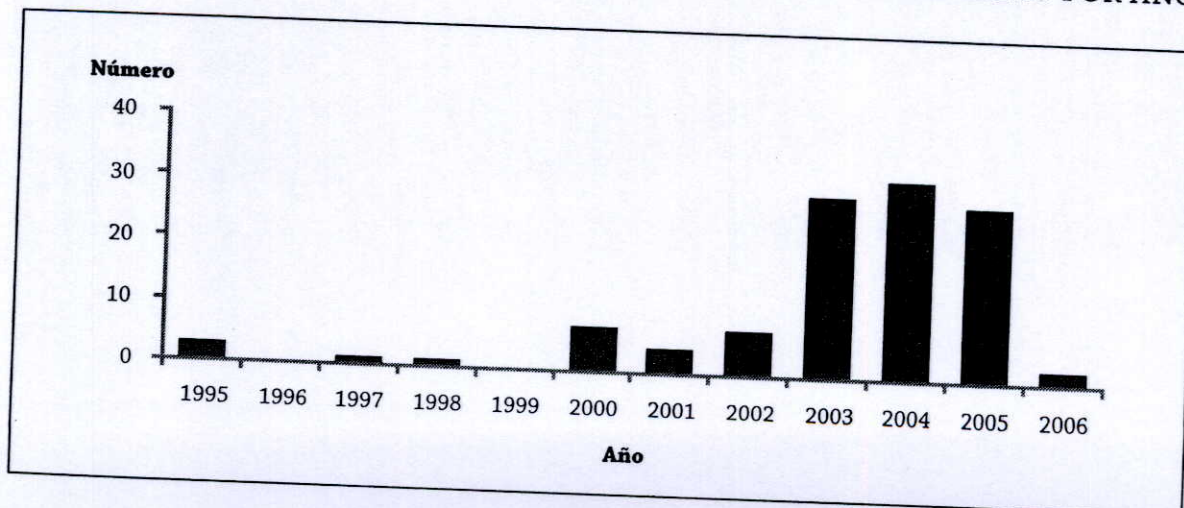


**Protestas en el sector cocalero**

Las protestas en el sector cocalero suman un total de 114 casos. Esencialmente, han sido protagonizadas por agricultores cocaleros en rechazo a los programas de erradicación del cultivo de la hoja de coca. Estas protestas fueron mínimas durante el gobierno de Fujimori y tendieron a aumentar en los años posteriores.

**Gráfico 53**

PERÚ 1995-2006. NÚMERO DE PROTESTAS EN EL SECTOR COCALERO POR AÑO



alcaldes que luego fueron congresistas) y la empresa minera ha hecho lo mismo”.

Así, Yanacocha termina siendo presa de una función que no le corresponde, pero que quizás no podía esquivar, lo que termina tergiversando su rol. De acuerdo con un dirigente campesino: “Yanacocha parece un candidato en campaña, ofrece de todo como un muchacho a una niña bonita, pero al final incumple [...] que te voy a dar trabajo, que vuelve mañana, la gente se va dando cuenta”.

Dejando de lado lo que pudiera expresar su política de proyección social, ésta quedó disminuida debido a la carencia de un plan integrador. La “responsabilidad social” de Yanacocha se redujo a una multiplicidad de pequeñas obras que no tenían mucho impacto entre los supuestos beneficiados. Al parecer, de todas estas obras sólo la implementación de electricidad en la zona de Porcón ha sido interpretada como una prioridad para el desarrollo local. El resto no sobresale, lo que transforma a esta empresa en un actor político más, que es la forma como se han relacionado tradicionalmente estos actores con la sociedad.

Esta caracterización se vuelve aún más compleja cuando se trata de una organización dispuesta en compartimentos, en la que las distintas gerencias no combinan esfuerzos, cuando deberían ser parte de una estrategia integral. Las entrevistas realizadas a los propios funcionarios de la empresa dan cuenta de un estilo de trabajo y de un sistema de comunicación que sacrifica complementariedad por autonomía. Un asesor de la empresa lo explica del siguiente modo: “Una cosa es lo que dice el gerente de relaciones comunitarias, otra cosa es lo que hace el ingeniero minero en el campo; mientras los primeros son los *locos* que se preocupan de la gente, a los otros sólo les interesa las piedras”.

Yanacocha no es tampoco un actor monolítico. Al interior se pueden notar pugnas internas que se evidencian con mayor claridad en contextos críticos como los del Quilish. A partir de las movilizaciones de septiembre, surgen dos posiciones encontradas. Por un lado, la de los sectores relacionados con Buenaventura, más reacios a replantear su relación con las comunidades: “No se consideran beneficencia pública sino empresarios”, señalan algunos. Por otro lado, la de los sectores relacionados con Newmont, quienes buscan replantear su relación con las comunidades en términos de mayor horizontalidad: “Sabemos que no somos el Estado, pero podemos contribuir al desarrollo”, indican.

\*\*\*

A estas iniciativas de concertación se le suman otras. El Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAM) ha impulsado, desde febrero del 2002, a la Comisión Ambiental Regional (CAR) – Cajamarca como un espacio para coordinar y concertar la política ambiental en el ámbito regional. El gobierno regional, por su parte, creó en junio del 2004 la Comisión Intersectorial Ambiental del Gobierno Regional de Cajamarca (CIAR) con el objetivo de supervisar las recomendaciones brindadas por INGETEC, aunque rápidamente esta comisión ha caído en la ambigüedad. A estas dos iniciativas estatales de concertación se le suma una reciente, la del Diálogo Minero, como un grupo más informal de intercambio entre empresas mineras, ONG y algunos dirigentes sociales. Mientras que las dos primeras iniciativas se ajustan a los ritmos y limitaciones propios de los actores estatales (caracterizados por la falta de potestad en el ámbito regional para emprender cambios y propuestas sustanciales), la juventud de la última aún no permite hacer una evaluación.

Al existir varios espacios de concertación regional en torno a la problemática minera, en realidad, no existe ninguno. Aparecen como iniciativas sucesivas que en la práctica se van superponiendo. La legitimidad que podría ganarse a través de la pluralidad de actores convocados, se reduce al impulso de una de las partes, ya sea ésta la empresa minera o los sectores que la critican. La falta de representatividad de los convocados es utilizada por los opositores para desvirtuar cualquier intento concertador. Sin bases sociales estrechamente ligadas a los miembros de las mesas, sólo la empresa minera, y en alguna medida el Estado, pueden expresar sus puntos de vista, más no así una sociedad desarticulada. La precariedad y debilidad de estos espacios los hacen inapropiados para canalizar formalmente las demandas, por lo que no son tomados en cuenta a la hora de solucionar los problemas.

### **Epílogo: ¿la inestabilidad perpetua?**

03 Luego de las movilizaciones “en defensa del Quilish” del 2004, la situación social en Cajamarca ha pasado a ser de una inestabilidad que amenaza con perpetuarse y convertirse en un *modus vivendi*. Cada intento

de iniciar actividades mineras en la región se ha topado con presiones sociales para impedirlo. San Cirilo y Cajabamba son algunos ejemplos. Estos desencuentros han sido calificados como producto del “efecto Quilish” en la región. Mientras tanto, los intentos concertadores encuentran rápidamente límites, ante el repliegue de las autoridades estatales, más preocupadas por mantener el mediocre *status quo* y por esperar el relevo de sus cargos.

En este contexto, la dinámica electoral se fue imponiendo paulatinamente, expresando una vez más la desconexión entre la sociedad y la política. Cuando el sentido común hacía esperar que los candidatos al Parlamento por esta región provinieran de las luchas sociales y de la crítica y defensa de la inversión minera, los que llegaron a ocupar un lugar en las principales listas parecen salidos “de la nada”; en su mayoría, son desconocidos para el común de los cajamarquinos. Ello delata procesos de definición de candidaturas para las listas parlamentarias que no consideran las demandas sociales objeto de movilización sino la influencia y el lobby.

En la región, los resultados electorales de abril del 2006 dan cuenta de una sociedad fragmentada políticamente: las provincias con mayor conexión con la costa (Cajamarca y Contumazá) confirmaron su tradición aprista; sorprendentemente, el fujimorismo ganó en las provincias que fueron afectadas por la violencia política (San Marcos y Cajabamba); y los seguidores de Ollanta Humala se impusieron en las provincias serranas norteñas, de tradición rondera, como Chota, Hualgayoc, Celendín. El voto se guió por tradiciones políticas y simpatías partidarias, antes que por posiciones pro o anti mina, un tema que a nuestra manera de ver no fue tratado cabalmente en las propuestas políticas.

El proceso electoral que culminará con la elección de Presidente y congresistas y que continuará con la elección de autoridades subnacionales en noviembre de este mismo año, es una especie de receso de la conflictividad social, cuyas demandas siguen latentes.<sup>17</sup> Se espera un

---

17. Cabe anotar que este artículo se escribió antes de la segunda vuelta electoral de las elecciones políticas generales —que se llevó a cabo el 4 de junio del 2006 y que fue ganada por Alan García P.— y de las elecciones regionales y municipales —que se celebraron el 19 de noviembre de ese mismo año. (Nota de los editores).